



Honorable Magistrado
Atte. Dr. **MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ**
Consejo de Estado – Sección Tercera
Bogotá.

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-26-000-2020-00055-00 (66052)
Recurrente: Cadsa Gestiones y Proyectos S.A. y otros
Tema: Solicitud respetuosa – De oficio solicitar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura suspender la orden de entrega o pago de la Sentencia por parte de las Entidades condenadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e intereses colectivos dentro del proceso Radicado: 76109333300220080007100, hasta tanto, se Falle el Recurso Extraordinario de Revisión, Rad. 11001-03-26-000-2020-00055-00.

GABRIEL ANTONIO PENILLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.470.525, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado número 95.266 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, según poder que reposa en el Expediente, con el mayor respeto me permito solicitarle que de oficio se disponga oficiar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura con la finalidad de **SUSPENDER** la orden de entrega por parte de las Entidades condenadas al Fondo para la Defensa de los Derechos e intereses colectivos dentro del proceso Radicado: 76109333300220080007100 del pago de la Indemnización, hasta tanto se Falle el Recurso Extraordinario de Revisión, Rad. 11001-03-26-000-2020-00055-00, que cursa ante la Sección Tercera – Subsección B, del Consejo de Estado, teniendo en cuenta el Auto Admisorio del Recurso Extraordinario de Revisión, cuyo Fallo puede resultar favorable a los intereses de las Entidades obligadas al pago de la Indemnización; lo cual generaría un sinnúmero de procesos tendientes a la recuperación de las sumas que se haya pagado hasta ese momento.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

Mediante Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, profirió fallo de segunda instancia dentro del presente proceso, resolviendo declarar responsables administrativa, civil, patrimonial y solidariamente responsables a las entidades accionadas por la falla del servicio en la prevención del riesgo que derivó en la muerte de 35 personas y la desaparición de dos más, tragedia ocurrida el 12 de abril de 2006, en la vía Cabal Pombo del Departamento del Valle del Cauca, en consecuencia los condenó a pagar a los damnificados los perjuicios morales causados siguiendo las pautas establecidas por el Consejo de Estado para reparar el daño moral en caso de muerte.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura Valle del Cauca, mediante Auto Interlocutorio No. 114 del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2.022), dispuso, entre otros, en el numeral 4º

“... **4.- ORDENAR** a las entidades y aseguradoras condenadas en la Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entregar al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS administrado por la Defensoría del Pueblo, dentro de los DIEZ (10) DÍAS siguientes a la ejecutoria del presente auto, un valor total de 45.475 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia mencionada, es decir la suma de \$37.650'293.940, aclarando que el valor a pagar por parte de las aseguradoras es hasta el límite del valor asegurado tal como se dejó consignado en la Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle.

5.- ORDENAR al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS que una vez reciba de las entidades condenadas y las aseguradoras los

45.475 smlmv, a través del Defensor del Pueblo quien hace las veces de administrador, pague las indemnizaciones individuales reconocidas a cada uno de los reclamantes del grupo que se relacionó en la parte considerativa de la presente providencia en el monto que se relaciona en la columna denominada smlmv por cada uno de los familiares fallecidos...”.

En consecuencia, existe una obligación contenida en una Sentencia, que puede ser anulada a través del Recurso Extraordinario de Revisión; por tal razón se requiere la intervención de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a fin de que el señor Juez Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura suspenda la orden dada a las entidades obligadas a transferir al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS el valor correspondiente a los 45.475 salarios mínimos mensuales legales, por concepto de pago de la Sentencia.

Es importante aclarar que el interés de mi Mandante es que se suspendan los efectos de la Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, así como el Auto Interlocutorio No. 114 del dieciocho (18) de febrero de 2022, a través del cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura, **RESUELVE:**

“... **4.- ORDENAR** a las entidades y aseguradoras condenadas en la Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entregar al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS administrado por la Defensoría del Pueblo, dentro de

los DIEZ (10) DÍAS siguientes a la ejecutoria del presente auto, un valor total de 45.475 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia mencionada, es decir la suma de \$37.650'293.940, aclarando que el valor a pagar por parte de las aseguradoras es hasta el límite del valor asegurado tal como se dejó consignado en la Sentencia No. 27 del 20 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle...”.

Efectivamente, la presente solicitud encuentra asidero jurídico en que todavía se encuentra pendiente el trámite del Recurso Extraordinario de Revisión que cursa ante el Consejo de Estado, en el cual es factible que se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, con ponencia de la Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, con fecha 20 de marzo de 2018, dentro del proceso con radicación 76109-33-31-002-2008-00071-01, instaurado por AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y OTROS; por tanto, mi Mandante podría salir avante; máxime cuando al pagar la Sentencia se generaría un perjuicio patrimonial y le sería imposible cumplir con el Plan de Acción del Director General e inversiones trazadas para el periodo 2020 - 2023.

PETICIÓN.

Con el mayor respeto, mi Mandante solicita que de oficio la Honorable Sección Tercera del Consejo de Estado, ordene al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura SUSPENDER la orden de entrega o pago de dicha Sentencia, por parte de las Entidades condenadas, según Fallo No.

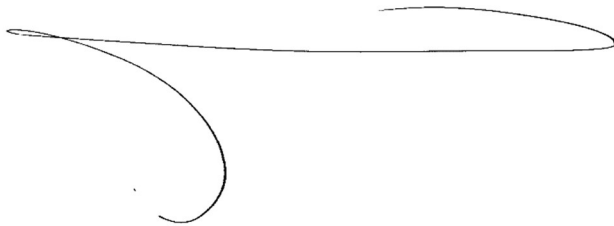
27 del 20 de marzo de 2018 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, al Fondo para la Defensa de los Derechos e intereses colectivos dentro del proceso Radicado: 76109333300220080007100, hasta tanto, se Falle el Recurso Extraordinario de Revisión, Rad. 11001-03-26-000-2020-00055-00.

NOTIFICACIONES

De mi Mandante: Cra. 56 #11 - 36, Cali, Valle del Cauca, correo electrónico: notificacionesjudiciales@cvc.gov.co

Del presente Togado: Cra. 56 #11 - 36, Cali, Valle del Cauca; dirección de notificaciones electrónicas: gabrielpenillas@hotmail.com.

Atentamente,



GABRIEL ANTONIO PENILLA SÁNCHEZ

C.C. No. 2.470.525. Tarjeta Profesional 95.266 C.S. de la Judicatura.

Apoderado CVC